

Cambian los vientos para energía renovable



SIMON RUEGSEGER

Feria de energía solar en Chumbivilcas, en los Andes peruanos.

PERÚ

Hildegard Willer desde Lima

Elevados precios del petróleo y cambio climático obligan a buscar fuentes de energía limpia.

No fue fortuito que los antiguos incas adoraran al Inti, el dios sol. Quien haya experimentado la quemazón del sol en los Andes, tiene una idea de cuánta energía pueden librar las fuerzas naturales en el Perú. Lo mismo ocurre en la costa con la fuerza de los vientos.

A pesar de estas circunstancias naturales, el aprovechamiento de la radiación solar o del viento para producir energía casi ha estado ausente en el debate energético peruano. Sólo círculos académicos u organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras investigaban o ejecutaban pequeños proyectos locales. Para la planificación energética del país no jugaron ningún rol.

Mucho indica que esos tiempos han cambiado: en mayo del 2007, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) organizó el primer Congreso sobre Biocombustibles y Energías Renovables en Lima, y desde entonces está promoviendo una serie de talleres y eventos junto con representantes del sector privado.

El nuevo interés por las energías renovables obedece también a la nueva coyuntura internacional.

“En parte se debe al alto precio del petróleo y el boom de

los biocombustibles que atrae a grandes actores internacionales. Y por otro lado está el cambio climático que pide energías limpias a futuro”, explica Javier Coello, gerente de Soluciones Prácticas-ITDG (Intermediate Technology Development Group), una ONG con larga trayectoria en el uso de energías renovables en proyectos de desarrollo.

La actual matriz energética del Perú depende aún en 56% del petróleo, y más de la mitad del petróleo consumido es importado. El plan del MEM consiste en reemplazar buena parte del petróleo importado por el gas natural peruano e incrementar el uso actual de energías renovables de 27% a 33%.

Sin embargo, no todas las energías llamadas renovables carecen de impacto ambiental: allí están las grandes hidroeléctricas en los Andes que tienen un gran potencial pero cuyos grandes diques amenazan la flora y la fauna local. También se considera el uso de la leña, que alcanza en el Perú —país fuertemente deforestado— a 17% del consumo de energías renovables.

Entre las que tienen menos impacto figuran sobre todo las microcentrales hidroeléctricas, la bioenergía a base de bagazo de caña de azúcar, y las energías solar y eólica. Tanto el potencial hidroeléctrico como el solar, eólico y geotérmico están lejos de ser agotados en el Perú, confirma el viceministro de Energía, Pedro Gamio Aita.

Energía limpia es más costosa

Un problema es que la producción de energías eólicas o solares es todavía más costosa que la producción a base de gas, petróleo o hidroeléctricas.

“Por eso, el Ejecutivo está promoviendo una ley para que el 5% de la producción energética inyectada a la red, provenga de energías renovables que no sean hidroeléctricas”, dice Gamio.

Actualmente el Congreso peruano está debatiendo sobre qué porcentaje meta se establecerá la ley —5% o 1%— ya que, al ser la energía eólica y solar más caras, las tarifas de electricidad aumentarían. Con la aprobación de la ley se abriría la posibilidad a inversionistas nacionales y extranjeros de hacer negocio con parques eólicos o solares, sobre todo en la costa peruana, donde se ubican los mayores centros de producción y de consumo en el Perú.

Donde la red eléctrica no llega

En la sierra peruana, el panorama energético se percibe muy distinto. Santo Tomás, en la provincia de Chumbivilcas, es un pueblo en la sierra sur a 12 horas al oeste de la ciudad de Cusco. Ronal Huallapayunca, Hugo Sueña y el cooperante suizo Simon Rüegegger, del Pro-

PERÚ	1
Cambian los vientos para energía renovable	
MÉXICO	2
Mujeres rebeldes	
COLOMBIA	3
Objetivos del Milenio en veremos	
AMÉRICA LATINA	5
No a castigos físicos ni tratos humillantes	
AMÉRICA CENTRAL	6
Catástrofe en ciernes	
BOLIVIA	7
Guerra mediática	
BELICE	8
Asume nuevo gobierno	
¡NUEVO!	
DOSSIER DESGLOSABLE:	
Responsabilidad Social Empresarial	
AMÉRICA LATINA	i
Entrevista con José Luis López Follegatti, especialista en medio ambiente	
PERÚ	ii
Diálogo de sordos	
BRASIL	iv
Empresas buscan compromiso con ciudadanía integral	

COLOMBIA

Multitudinaria marcha.

Más de un millón de personas se movilizaron el 4 de febrero por las calles de Bogotá contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) bajo la consigna "No más secuestros, no más mentiras, no más muerte, no más FARC". Marchas similares se realizaron en más de 50 ciudades de Colombia y 130 de todo el mundo.

Convocada por internet a través de la red Facebook, la iniciativa recibió el respaldo del gobierno colombiano y de diversas organizaciones sociales y políticas del país. Algunos grupos, como el izquierdista Polo Democrático Alternativo, la segunda fuerza política del país (*NA, Dic. 13, 2007*), invocaron a protestar no sólo contra las FARC sino también contra el paramilitarismo y las violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas gubernamentales.

Familiares de los rehenes en manos de las FARC (*NA, Feb. 6, 2008*) se rehusaron a participar en la marcha señalando estar a favor de un acuerdo humanitario.

Astrid Betancourt, hermana de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, en poder de las FARC desde hace seis años, señaló estar en contra de la marcha por considerar que está siendo manipulada por el gobierno.

"La forma en que se ha hecho esta convocatoria esconde una justificación de la política de guerra del presidente Álvaro Uribe, para cerrar así toda posibilidad de una solución dialogada para la liberación de los rehenes", declaró a la prensa. "Estas marchas, convocadas por la forma en que se han hecho, atizan la rabia y no van en favor de la liberación". —*NA*.

grama de Empleo y Juventud (PEJ) de la Prefectura de Sicuani, promueven el uso de energías renovables para combatir la pobreza.

Ellos construyen duchas solares en los colegios rurales y enseñan cómo cocinar con el sol o cómo construir viviendas que aprovechen mejor las condiciones climáticas. Gran parte de la población de Chumbivilcas pertenece al alrededor de 25% de la población peruana que no está conectada a ninguna red eléctrica.

"Hemos prestado paneles voltaicos a colegios rurales no conectados, y algunos han respondido muy bien; se han agenciado una computadora y lámparas para poder estudiar de noche", cuenta Rüegegger.

Pero también hay experiencias donde por falta de mantenimiento un panel fotovoltaico sólo funciona poco tiempo. Sin embargo, para Rüegegger, la electrificación mediante estos paneles es una alternativa real para llevar energía a pueblos aislados, a pesar de que tiene todavía un costo más elevado que la energía convencional.

¿Quién regula las energías renovables?

Tener un panorama sobre todos los pro-

MÉXICO

John Ross desde Chiapas

Mujeres rebeldes

Estructura zapatista impulsa empoderamiento de sus integrantes mujeres.

Decenas de mujeres zapatistas, muchas de ellas indígenas mayas tzeltal de las tierras bajas de Chiapas, adornadas con plumas y cintas multicolores y sus ojos oscuros enmarcados por pasamontañas negras, salieron del rústico auditorio en medio del aplauso de cientos de feministas internacionales reunidas en la sesión inaugural del Encuentro de Mujeres Zapatistas con Mujeres del Mundo, realizado a fines del año pasado por invitación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

A fines de julio, al término de una reunión con campesinos de una decena de municipios en la aldea conocida como La Realidad, Evarilda, una joven rebelde de esa comunidad, al parecer sin la aprobación previa de la comandancia general del EZLN, convocó al encuentro de todas las mujeres, explicando que los hombres estaban invitados para ayudar en la logística pero que mejor se quedarán en casa a cuidar a los niños y los animales mientras las mujeres conspiraban contra el capitalismo.

Siguiendo lo dicho por Evarilda, durante el encuentro llevado a cabo del 29 al 31 de di-

yectos vigentes de energías renovables en el Perú no es fácil: están los proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, los que reciben fondos de la cooperación bilateral, y los de mecanismo de desarrollo limpio con base en el mercado del carbono. Ninguno recibe dinero del presupuesto nacional.

"En este momento estamos preparando una cartera de proyectos para cuando vengán los presidentes europeos a Lima en mayo de este año", afirma Gamio, en referencia a la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE), que se realizará en Lima del 16 de mayo.

Tanto para la cooperación internacional como para los inversionistas privados, el Perú se ha vuelto un país altamente atractivo para proyectos de energías renovables.

Sin embargo, algunos se preguntan si es suficiente abrir las puertas a los inversionistas y si no falta formular una política del Estado y promover una institución estatal al respecto.

"Proveer a la gente con energía debe ser una tarea que un Estado tiene que asumir", dice Rüegegger. □

ciembre —al que asistieron entre 300 y 500 mujeres activistas no mexicanas— en esta localidad llamada oficialmente municipio autónomo Francisco Gómez, y que rindió homenaje a la memoria de la fallecida comandanta Ramona, los hombres desempeñaron decididamente un papel secundario.

Letreros colocados alrededor del caracol —centro cultural y político zapatista— llamado "Resistencia Hacia un Nuevo Amanecer", advertían a los varones que no podían actuar como "voceros, traductores o representantes en las sesiones plenarias".

En vez de ello, sus actividades se confinarían a "preparar y servir comida, lavar platos, barrer, limpiar las letrinas, recoger leña, y cuidar a los niños".

De hecho, algunos jóvenes zapatistas se pusieron delantales que llevaban impresas palabras como "tomate" y EZLN para trabajar en las cocinas. Mientras tanto, los hombres mayores se sentaban en silencio en bancas de madera en las afueras del auditorio, algunas veces haciendo señas entre ellos cuando una compañera sostenía un buen argumento o sonriendo con orgullo luego que su hija, esposa, hermana o madre contaran sus historias a las asistentes.

Mujeres ganan espacio

El papel de la mujer dentro de la estructura zapatista ha cambiado drásticamente desde que se gestó la rebelión. Cuando los fundadores del EZLN, radicales de las ciudades del norte de México, llegaron por primera vez a las tierras bajas tzeltal-tojolabal en el sureste de Chiapas, las mujeres eran mantenidas monolingües por sus maridos como un medio de control, dedicadas a criar familias, y su posición no era destacada en la comunidad. Los que vinieron de afuera

MÉXICO

Por el derecho a protestar. Bajo el lema "Protestar es un derecho, la represión es un delito", la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" (Red TDT) inició el 5 de febrero una campaña contra la criminalización de la protesta social.

"En México, desde hace varios años venimos viviendo un proceso en el cual se equipara y trata como delincuentes a las personas que realizan protestas sociales", denunció la Red TDT, agregando que el gobierno lleva cada vez más los conflictos a la arena judicial.

Para criminalizar las protestas, sostiene la Red TDT, las autoridades llevan a cabo detenciones arbitrarias, equiparan a los luchadores sociales como delincuentes, agravan las acusaciones, se les imputa delitos políticos o contra la seguridad nacional, se ilegaliza la protesta social y no se cumple con el debido proceso.

En conferencia de prensa, la Red TDT presentó 60 casos llevados al terreno judicial.

Durante todo el mes de febrero, la Red TDT difundirá en 20 de los 32 estados, materiales educativos y gráficos "que reivindicuen la protesta social como un derecho y el ejercicio de la misma como indispensable en una sociedad realmente democrática". —NA.

ofrecieron a las jóvenes independencia y las invitaron a asistir a los campos de entrenamiento en la montaña donde aprenderían a llevar un arma y nociones de castellano. Se convirtieron en parte de la fuerza combativa del EZLN.

El 1 de enero de 1994, cuando los zapatistas tomaron las ciudades de San Cristóbal y Ocosingo y otras cinco cabeceras municipales, las mujeres constituían un tercio del ejército rebelde. Combatientes mujeres se inmolaron en la sangrienta batalla por Ocosingo.

Integrar a las mujeres a la estructura militar resultó más fácil que cultivar la participación en la estructura civil, arraigada en la vida de las comunidades. Aunque las mujeres ocuparon cinco lugares de los 19 en el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, la comandancia general del EZLN, su representación es mucho menor en los 29 consejos municipales autónomos y las cinco Juntas de Buen Gobierno que administran la autonomía regional zapatista.

Pero conforme crecía la infraestructura social zapatista, las mujeres se convirtieron en promotoras de salud y educación y líderes en las comisiones que planificaban esas campañas.

Baja incidencia de violencia

La liberación de las mujeres en la cultura zapatista se ha visto reforzada por la prohibición del consumo de alcohol impuesta por los zapatistas en sus comunidades. Mientras que muchas localidades mayas del interior, como San Juan Chamula, están satura-

das por el alcohol y elevadas cifras de violencia doméstica, la región zapatista tiene los más bajos indicadores de abuso en el estado, según datos mostrados por la comisión de mujeres del Congreso de Chiapas.

Como estado, Chiapas tiene una de las cifras más elevadas de femicidios en México: 1,456 mujeres fueron asesinadas entre los años 2000 y 2004 (NA, Feb. 9, 2005 y Abr. 19, 2006). La baja incidencia de violencia contra las mujeres en la zona de influencia zapatista es más notable porque gran parte del territorio rebelde en las zonas bajas se extiende a territorio guatemalteco, donde 500 mujeres son asesinadas cada año.

Con los hombres cuidando a los niños y limpiando las letrinas, las mujeres contaron sus historias en las plenarias. Muchas jóvenes compañeras como Evarilda han crecido en la revolución —que este año cumplió su 14º aniversario— y contaron que aprendieron a leer y escribir en escuelas rebeldes, de su trabajo como promotoras sociales, como maestras, como campesinas o madres. Las abuelas zapatistas hablaron de los primeros años de la rebelión y comandantas veteranas como Susana, quien habló con emoción sobre Ramona, "la más pequeña de las pequeñas", su compañera de tantos años, recordaron cómo en la guerra hombres y mujeres aprendieron a compartir los quehaceres domésticos como cocinar y lavar ropa.

"Muchos de los compañeros todavía no quieren entender nuestras demandas", afirmó la comandanta Sandra. "Pero no podemos luchar contra el mal gobierno sin ellos". □

COLOMBIA

Susan Abad desde Bogotá

Objetivos del Milenio en veremos

Preocupan divergencias en mediciones además de gran inequidad entre áreas rural y urbana.

A siete años de vencerse el plazo para cumplir los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) —que 189 países se comprometieron a alcanzar a favor de los más pobres en una reunión histórica realizada en Nueva York en el 2000—, en Colombia no existe consenso sobre si se cumplirán todas las metas proyectadas para el 2015.

Las mediciones hechas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestran divergencias en medición y, por ende, en los resultados en algunos de los ocho objetivos pactados que son: erradicar la pobreza extrema y el hambre; lograr la educación básica universal; promover la equidad de género y la autonomía

de la mujer; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir el VIH/SIDA, el dengue y la malaria; garantizar la sostenibilidad ambiental, y fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

"Tenemos hoy tres niveles de indicadores nacionales: los del DNP, que maneja 31 indicadores, los de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y los que maneja el PNUD (51 indicadores). Los tres, en muchos casos, no miden exactamente igual y las fuentes no son las mismas" explica José Fernando Arias, director de Desarrollo Social del DNP.

Optimismo gubernamental

César Caballero, coordinador del Proyecto Objetivos del Milenio en lo Local del PNUD, afirma que el Objetivo Uno, erradicar la pobreza en Colombia a un 28.5% en el 2015, "pareciera que no se va a poder cumplir", y explica que su pesimista proyección se basa en que "en el 2002 teníamos una pobreza del 52% y en este momento, a pesar de que es-

estadísticas en relieve

AMÉRICA LATINA/ EL CARIBE

Economía se frena. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) prevé una desaceleración de la economía para el 2008 debido a la volatilidad en los mercados mundiales y menor crecimiento de las economías de los países desarrollados, particularmente de EEUU, principal socio comercial de la región.

Según el "Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2007", divulgado en diciembre, la región creció en 5.6% en el 2007 —0.3% más que en el 2006, pero la CEPAL augura para este año un crecimiento de 4.5%.

AMÉRICA LATINA/ EL CARIBE Tasa de crecimiento del producto interno bruto (%)

País	2006	2007
Panamá	7.5	9.5
Argentina	8.5	8.6
Venezuela	10.0	8.5
Perú	7.2	8.2
Rep. Dominicana	10.0	7.5
Uruguay	7.3	7.5
Colombia	6.0	7.0
Costa Rica	6.8	7.0
Cuba	12.5	7.0
Honduras	5.6	6.0
Paraguay	4.0	5.5
Guatemala	4.6	5.5
Trinidad & Tobago	12.0	5.5
Chile	4.4	5.3
Brasil	2.8	5.3
El Salvador	3.8	4.5
Bolivia	4.5	4.0
México	4.8	3.3
Haití	2.5	3.3
Nicaragua	3.7	3.0
Ecuador	4.9	2.7
Jamaica	2.6	1.5

Fuente: CEPAL

tamos avanzando, estamos en el 45% de pobreza".

Sin embargo, el DPN proyecta que para el 2010 la pobreza disminuirá a 35%, lo que le permite afirmar que sí se llegará al 28.5% previsto para el 2015.

Arias resalta además que en este mismo objetivo, en lo referido al indicador de pobreza extrema, no sólo se llegará a la meta de reducirla de 20.4% en que se encontraba en 1991 a 8.8%, sino que se espera sobrepasar lo pactado y lograr estar en un 6% en el 2015.

Otro indicador preocupante para el PNUD está en el Objetivo Dos —lograr la enseñanza primaria universal—, sobre analfabetismo para personas entre 15 y 24 años de edad, que en 1992 era de 3.7% y se aspira que sea de 1% en el 2015.

Caballero estima que "la tasa de personas analfabetas en este rango en el 2006 era de 2.1%, y de seguir la tendencia actual de decrecimiento llegaría a ser de 1.6% en el 2015".

Por su parte, el DPN proyecta que la tasa de analfabetismo en ese rango será de 1.4% en el 2010, por lo que se puede afirmar que sí se llegará a la meta del 1%.

El experto del PNUD manifiesta igualmente el temor de su organización de no lograr en el Objetivo Cuatro —reducir la mortalidad infantil— la meta de cobertura de vacunación del 95% con el Plan Ampliado de Inmunizaciones para los menores de 5 años, pero para el DPN esta meta se logrará en el 2010.

Ambas organizaciones coinciden en mantener especial preocupación en el Objetivo Tres —igualdad de género y autonomía de la mujer—, por la gravedad de los indicadores de violencia contra la mujer, que ha aumentado, y por la baja representación política de las mujeres en el Congreso y cuerpos colegiados. "Las mujeres son el 50% de la población y apenas son el 12% de los parlamentarios", indica Caballero.

No bastan las políticas

Y si hay algo en lo que el DNP y el PNUD coinciden rotundamente es la gran inequidad existente entre el área rural y la urbana y aún entre los mismos departamentos de Colombia.

"Los promedios de alcances de metas están empujados por las grandes ciudades, pero el resto del país está muy rezagado", dice Caballero, quien agrega que si se midiera sólo el área rural y los departamentos de menor desarrollo "sería probable que en estos lugares no se llegue a cumplir ninguno de los ODM".

Arias, por su parte, afirma que "ni Colombia ni ningún país del mundo va a cumplir los ODM en las zonas donde están más rezagados. Lo que podemos hacer es un gran esfuerzo para reducir las brechas regionales y poblacionales".

Pero para reducirlas la política nacional no basta, dice Caballero.

"Hay que hacer una implementación de políticas y proyectos regionales y con sustento en realidades regionales. Hay que llegar a departamentos y municipios para que en la práctica y en lo concreto se adapten políticas que sean flexibles para cada uno de los temas", sostiene.

Para ello el PNUD viene acompañando a alcaldes y gobernadores en las regiones más vulnerables y, con la experiencia técnica adaptada a su realidad, ayuda a identificar sus indicadores iniciales para desde ahí diseñar sus propias políticas de crecimiento social.

Mientras tanto, el DPN, tiene como herramienta el Sistema de Monitoreo a las Transferencias, que permite asignar recursos a los municipios más rezagados y supervisar su uso en sectores claves como salud, agua potable y educación. "Nada logramos con tener un sistema de asignación muy equitativo si la ejecución del gasto no se hace bien", dice Arias. □

notas breves

- EEUU dejó de ser el principal destino de las exportaciones de **Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú**. Entre enero y setiembre del año pasado los países de la Comunidad Andina exportaron a EEUU US\$4.4 millones, casi la mitad de los \$8.5 millones en el mismo periodo el 2006. La mayoría de las exportaciones se destinan a América Central, América del Sur, Europa y Asia.

- El Departamento de Estado de EEUU admitió el 9 de febrero que un asisten-

te de seguridad de su delegación diplomática en **Bolivia** solicitó a becarios y voluntarios espiar las actividades de ciudadanos cubanos y venezolanos en ese país. El presidente Evo Morales censuró el hecho y declaró al funcionario "persona no deseable".

- **Brasil** tiene previsto duplicar su producción de etanol en cinco años, de 18 millones de metros cúbicos a 35 millones anuales, para satisfacer el aumento de la demanda de biocombustibles. Para lograr este objetivo se necesitará 2.5 millones de hectáreas de cultivo de caña de azúcar.

- El Frente Farabundo Martí

para la Liberación Nacional (FMLN) de **El Salvador** negó enfáticamente que el gobierno de Venezuela vaya a financiar su campaña para las elecciones presidenciales del 2009, tal como lo afirmó un alto funcionario de inteligencia de EEUU.

- El ex obispo Fernando Lugo oficializó el 31 de enero su candidatura a la presidencia de **Paraguay** por la coalición opositora Alianza Patriótica para el Cambio. Lugo, favorito para ganar las elecciones del 20 de abril, competirá con el general retirado Lino Oviedo, quien en 1996 protagonizó una intentona golpista.

Responsabilidad Social Empresarial:

Comunicación e información

AMÉRICA LATINA

Entrevista con José Luis López Follegatti, especialista en medio ambiente

“La información no sólo es cómo sale sino cómo llega”

En los últimos tiempos el tema de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha sido motivo de muchas reflexiones y debate en la región, incluida la polémica entre quienes defienden su carácter voluntario y quienes impulsan la necesidad de regularla. Para indagar más sobre este tema conversamos con el educador **José Luis López Follegatti**, asesor en diálogo, liderazgo y medio ambiente de la Asociación Civil Labor, organización no gubernamental (ONG) con sede en el Perú. Labor, junto con otras ONG peruanas y de América Latina, integra la Red Puentes, que promueve la RSE desde una perspectiva de derechos ciudadanos y de sociedad civil.

En la siguiente entrevista concedida a **Elsa Chanduví Jaña**, jefa de prensa de **NOTICIAS ALIADAS**, López Follegatti se refiere a la importancia que tiene el derecho a la información en el marco de la RSE, pero resalta que falta trabajar cómo hacer llegar esta información.



WILLIAMCHICO

José Luis López Follegatti

¿Cuáles son los principios básicos comunes sobre RSE que se manejan en América Latina?

Los principios más operativos [son]: transparencia en lo que se hace, información permanente, sistemas de participación —lo que tú haces, lo haces mejor si haces que la gente esté enterada, más aún, se involucre en lo que haces—; rendición de cuentas; capacidad de hacer alianzas: cuando tú haces algo y puedes involucrar a uno, dos, más actores en esta acción, eso se hace mejor. Y también capacidad de despertar en la gente su propia habilidad, su propia potencialidad, para que por sí misma ejerza una actividad que no sólo dependa del óbolo, la dádiva, sino de su propia habilidad, de iniciativas, de apoyos que se han generado.

¿Qué caracteriza las prácticas de RSE que se desarrollan actualmente en nuestra región?

En nuestra región es todavía un desarrollo desigual, no es una cultura incorporada en la mayoría de las empresas. Pero hay suficientes buenos ejemplos que nos pueden dar una visión y una característica, aunque es diferente en cada país.

Hay desde buenas alianzas empresariales, como la del Instituto Ethos en Brasil en que se hacen alianzas y se generan programas exitosos de responsabilidad social, hasta las alian-

zas más particulares que hacen las empresas con alcaldes y comunidades como se hace en el Perú, o la responsabilidad social que se practica con el Estado y desde el Estado, con un Estado que canaliza esa responsabilidad social y la hace más efectiva, como el caso de Chile.

También hay fundaciones que se crean con mucho dinero, como en Venezuela, en Colombia, o en Argentina, y estas fundaciones receptoras de los fondos de las empresas hacen enormes obras a favor de las comunidades más vulnerables. Entonces, hay diversas maneras de relacionamiento con la sociedad y con el Estado en cada país, cada una está ensayando, cada una tiene sus virtudes y también tiene sus propias limitaciones.

¿Cómo debieran ser estas prácticas de RSE para que constituyan realmente un aporte al desarrollo sostenible y a los derechos?

[Debieran] salir de varios esquemas. [Primero salir] del esquema utilitario, es decir, “yo soy responsable social porque me conviene para que la gente esté calmada y yo pueda crecer en inversiones”. Aunque eso es en parte verdad, no puede ser lo que guíe como aspecto fundamental. Entonces, [hay que] salir de un esquema utilitario directo.

Lo otro es “yo voy a ser simplemente más dadivoso, paternal, para apoyar a las comunidades mucho más pobres, pero no me interesa mucho la opinión, la participación [de éstas]”. Sigue siendo el esquema de filantropía, que no es el duradero.

El otro esquema es el de decir al Estado: “Yo te doy plata a ti y tú eres el que tiene que solucionar el problema de ser más socialmente responsable. No me metas en ese problema”. Entonces presionan al Estado para que sea más eficiente. Este esquema, aunque es necesario un Estado que regule, dirija y facilite el proceso de relación, de apoyo, no es bueno, porque le quita la propia responsabilidad a la empresa.

Una visión también general es: “Tú eres socialmente responsable no porque quieres cubrir una necesidad inmediata de la población, sino que quieres transferir una capacidad, para que la capacidad transferida sea asimilada y despegue la actividad de ese sector social”. Pero eso no se logra entre una empresa y una comunidad, se logra con una relación muy amplia de grandes alianzas, y duraderas, para que entonces todos los actores se

“Que las empresas informen no sólo es un deber, sino una necesidad estratégica de ellas”.

— J. L. López Follegati

movilicen: la universidad, los gobiernos, las alcaldías, entonces todos juntos generan como resultado final una capacidad adquirida.

¿Considera usted que existe relación entre RSE y derecho a la información, a la comunicación?

Ese es uno de los puntos más interesantes que se exige se practique. Hoy en día como hay tanta velocidad, acceso y fluidez de la información y la comunicación, si tú no te colocas en el circuito de la información y dices “presente, estoy acá con mi información, con mis actividades y las pongo al alcance de todos”, esta fluidez del circuito informativo y comunicador que genera la integración global puede rápidamente generar una distorsión de la información. Y esa empresa, por no querer informar, termina atrapada con informaciones distorsionadas de su actividad, y [la gente] construye una opinión a partir de esta información distorsionada.

Es decir, que las empresas informen no sólo es un deber, sino una necesidad estratégica de ellas, porque si no informan, otros informarán por ellas y no van a estar muy seguras de qué cosa se va a informar.

También se puede ver la información como un derecho de las comunidades, ¿cierto?

Hoy en día hay derechos que a la vez son

necesidades y conveniencias de la otra parte. En este caso, como la información es un derecho y a la vez conveniencia —llamémoslo así por el momento— de la empresa, entonces esto puede ser mejorado con la creatividad de ambos actores. Entonces, la información no es sólo redactar un incidente; la información es que está fluyendo un sistema de monitoreo, vigilancia y análisis de lo que sucede en un lugar determinado cuando actúa una empresa con determinado nivel de influencia.

El sistema de monitoreo, vigilancia, análisis y evaluación sí funciona con la empresa, pero con la participación de la comunidad, de la ONG, de la universidad, va a reaccionar prestando información valedera, legítima y sumamente oportuna cuando el sistema funciona con eficacia.

Información hay, el otro problema con la información es ¿la entiendo? ¿tengo posibilidades de recusar esa información, contrastarla? La información no sólo es cómo sale sino cómo llega. El cómo llega es lo que hay que trabajar. Pero todos informan, de eso no hay duda. El Estado, las empresas informan. ¿Pero aseguro que llegó la información como yo quisiera? Alguna gente hace alianzas con ONG para que las ayuden a que llegue la información adecuada a la comunidad. Hay sistemas que están construyendo: auditorías legítimas, auditorías ambientales que todos comparten. □

PERÚ

Milagros Salazar desde Lima

Diálogo de sordos

Comunicación entre empresas mineras y comunidades, una necesidad imperiosa.

Cabuyal es el pueblo más alejado de la provincia norteña de Ayabaca, en la frontera con Ecuador. En ese lugar sin luz ni agua potable del departamento de Piura, la empresa minera Majaz podría provocar un impacto social y ambiental con su proyecto de cobre y molibdeno Río Blanco.

Pero los habitantes de Cabuyal pese a estar cerca del enclave minero, están lejos de conocer los beneficios y riesgos potenciales de las actividades de su vecino. Para acceder a la evaluación ambiental completa de los trabajos de exploración de Majaz (*NA, Oct. 3, 2007*), un poblador tendría que viajar más de 20 horas a pie, a caballo y en bus hasta llegar a las oficinas de la Dirección Regional de Minería en la ciudad de Piura. Y de no encontrar el documento, el periplo terminaría prolongándose 14 horas más en bus rumbo a Lima para revisar los archivos del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

En su informe del 2006 sobre el caso Majaz, la Defensoría del Pueblo detectó que la minera no cumplió cabalmente con poner a disposición del público la información, tal como le exige la ley.

El camino para intentar ser un poblador informado en una zona de actividad minera está lleno de tropiezos. Y, en consecuencia, las vías de comunicación entre las comuni-

dades y las empresas están usualmente bloqueadas.

Expertos advierten que si las compañías buscaran formas efectivas de comunicarse con las comunidades que rodean sus proyectos para escuchar y considerar sus opiniones como parte del universo de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), las mineras podrían contribuir a prevenir los conflictos socioambientales, cooperar con la gestión ambiental y promover los derechos de sus vecinos.

La clave de ser responsable

A primera vista, la RSE se entiende como el compromiso de las empresas de contribuir a la prosperidad dentro y fuera de sus dominios, mediante una adecuada relación con sus trabajadores, una correcta conducta tributaria, la protección del medio ambiente y acciones que impulsen el bienestar de la población que las rodea.

“La clave de la RSE es la forma en que la empresa se involucra en el desarrollo de la comunidad”, manifiesta Iván Lanegra, gerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Junín, en el centro del país. Entonces, dice Lanegra, cuando la compañía vincula sus actividades al futuro de estas poblaciones y no opera como una isla, “se toman las medidas para establecer buenas políticas de comunicación”.

Este proceso de acercamiento donde el Estado —gobierno central, regional y local— juega un rol neurálgico como fiscalizador y promotor, dependerá mucho del acceso y de la calidad de la información: si es transpa-



JORGE GARCÍA

Fundición contaminante de empresa Doe Run Peru en La Oroya, y anuncio turístico ecológico de la misma empresa.

rente, confiable, si está disponible o ausente para que las comunidades pueden ejercer una participación ciudadana informada.

De por sí la naturaleza de la actividad minera impone un gran reto debido a que la Evaluación Ambiental (EA)—que la empresa muestra a las comunidades y al Estado para validar la etapa de exploración— y los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para la explotación del mineral son documentos muy voluminosos y técnicos, que ni el más experto de los ambientalistas podría revisar a conciencia en el plazo que le otorga la ley para formular observaciones.

La versión modificada del EIA del proyec-

esto alimenta la percepción de que para el Estado es irrelevante lo que piensan las comunidades, por lo que el proceso de validación social de estos proyectos se convierte “en un mero formalismo dentro del procedimiento administrativo”.

Normas gaseosas

En el Perú existen normas muy genéricas y débiles sobre el tema. La Ley General del Ambiente establece la adopción voluntaria de políticas de responsabilidad social empresarial en las zonas donde operan las compañías para mitigar o eliminar los impactos de sus operaciones, y el deber de las entidades gubernamentales de garantizar el acceso a la información ambiental y la participación ciudadana.

Tales principios se intentaron garantizar en diciembre del 2003 cuando el MEM ordenó a las mineras suscribir compromisos sociales de apoyo y diálogo con las comunidades de su entorno e incluso que anualmente informen al sector sus avances. Sin embargo la norma resulta ineficaz en el campo.

En el reglamento de consulta y participación ciudadana para la aprobación de los EIA se exige a las empresas la realización de talleres y audiencias para recoger las opiniones de los pobladores antes de la etapa de extracción de los minerales, pero no la incorporación de estas observaciones.

Como afirma el economista José De Echeave, de CooperAcción, no se plantea la comunicación como un proceso de “ida y vuelta” que permita implementar las sugerencias para generar “relaciones de equilibrio”.

La relación efectiva que las mineras deben desarrollar con las comunidades ya no sólo es un acto de buena voluntad asociada a la ética, sino incluso resulta vital para las empresas en términos económicos porque podrían prevenir los conflictos y desentramar sus proyectos. Y en ese intento, la comunicación resulta ser la clave para que los alrededores de los yacimientos mineros dejen de ser un campo de Babel, donde nadie entiende al otro. □

Comunicación e información: vía bloqueada

- En el 2006, la organización no gubernamental Grufides detectó que la minera **Yanacocha** —la aurífera más grande de América Latina— copió tal cual dos informes de Evaluación Ambiental (EA) para la etapa de exploración minera de dos proyectos distintos, lo cual no garantiza la calidad de estos estudios técnicos y la veracidad de la información que según la ley deben estar a disposición de la población. Se trata del proyecto Yanacocha Oeste-Cuencas del Río Rejo y Río Porcón (Peizo) y de Yanacocha Zona Este Cuencas del Río Chonta y Quebrada Honda (Peyze), en el noroeste departamento de Cajamarca.
- Los pobladores que rodean el proyecto Río Blanco, de la empresa minera **Majaz**, en las alturas de las provincias norteñas de Ayabaca y Huanca-bamba, se vieron obligados a viajar entre 15 a 20 horas desde sus caseríos hasta la ciudad de Piura para acceder al expediente de Evaluación Ambiental. En la municipalidad más cercana al campamento minero sólo se dejó un resumen ejecutivo pese a que la ley exige que se debe dejar una copia del documento completo, informó la Defensoría del Pueblo.
- La empresa minera **Doe Run** impulsa campañas de salud y de información en que promueve la idea de que la contaminación por agentes tóxicos de la fundición que opera en el distrito de La Oroya, en la sierra central del Perú, puede enfrentarse con buena alimentación e higiene. Pero las organizaciones ambientalistas de La Oroya advierten que con estas campañas la empresa evade su responsabilidad de reducir en forma significativa las emisiones nocivas de la planta metalúrgica. Según varios estudios, más de 90% de los niños de La Oroya tienen niveles de plomo en la sangre superiores al límite permitido por la Organización Mundial de la Salud, de 10 microgramos por decilitro.

Empresas buscan compromiso con ciudadanía integral

Va ganando terreno una noción más amplia de responsabilidad social.

La búsqueda de la ciudadanía integral, para todos los brasileños, está en el centro del concepto de responsabilidad social que viene siendo difundido en Brasil.

Es un concepto que considera la participación ética de la empresa en su relación con todos los eslabones de su cadena productiva, los llamados *stakeholders* o partes interesadas, y no sólo en términos de financiamiento a un proyecto o programa social, por ejemplo, sino que ese apoyo integra también la noción amplia de responsabilidad social.

Augusto Rodrigues, director de comunicación empresarial y relaciones institucionales de CPFL Energía, el principal grupo privado del sector eléctrico en Brasil, observa que en los últimos años hubo una evolución en el concepto de responsabilidad social empresarial (RSE) hacia una visión de sostenibilidad, que incluye una dimensión de preocupación por el futuro: el futuro de la empresa, de la comunidad y del planeta. En este sentido, la empresa pasa a ser protagonista, incentivando la movilización y ayudando en la información sobre temas que miran hacia el futuro, como el calentamiento global, la educación, la lucha contra la corrupción.

Compromiso ético

La noción de RSE fue difundida sobre todo a partir de la actuación de organizaciones como el Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social, creado en 1998 en São Paulo.

El concepto impulsado por Instituto Ethos considera el compromiso ético de la empresa con el bienestar de sus funcionarios-colaboradores, con sus clientes y con la comunidad donde está insertada. La idea abarca también la necesaria preocupación ambiental de la empresa, que igualmente, entre otros puntos, está atenta al origen de los productos con los cuales trabaja, no aceptando, por ejemplo, materiales resultantes de la explotación del trabajo infantil.

Tendencia irreversible

“La responsabilidad social empresarial es una tendencia irreversible, no se trata de una moda”, considera el empresario Luis Norberto Pascoal, presidente del grupo DPaschoal y él mismo uno de los grandes responsables de la difusión del concepto en

Brasil. Pascoal fue quien concibió la idea de la Fundación DPaschoal, creada en 1989 para incentivar proyectos y programas en educación, la gran área a la que están atentos los empresarios que practican la responsabilidad social.

Es lo que constata un estudio del Grupo de Institutos, Fundaciones y Empresas (GIFE), creado en 1995. El estudio, del 2005 y 2006, reveló que, entre 68 instituciones examinadas, 55 implementaban o apoyaban iniciativas en el área educativa. Las 34 organizaciones que divulgaron lo que invirtieron sumaron R\$124 millones (US\$70.4 millones) en inversiones en educación en el 2005. Los estimados del GIFE son que la inversión total en educación es por lo menos el doble de ese valor.

Varios estudios están mostrando la actuación social cada vez mayor de las empresas en el país, como parte de la visión más amplia de responsabilidad social. Según la Encuesta Acción Social de las Empresas, del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), ligado al Ministerio de Planeamiento, entre el 2000 y el 2004 la participación de empresas en acciones de responsabilidad social aumentó de 59% a 69%. Esto significa que, en el 2004, cerca de 600,000 empresas actuaban socialmente de modo voluntario en Brasil. Se estima que las empresas invierten más de R\$5 millones (\$2.84 millones) en acciones sociales en el país.

El Pacto Empresarial contra la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes en las Carreteras Brasileñas, lanzado a fines del 2006 y que tiene el apoyo de grandes empresas como Petrôleo Brasileiro (Petrobras), Arcor do Brasil, Suzano Petroquímica e Itaipú Binacional, es uno de los más concretos indicadores de cómo ha evolucionado en Brasil el concepto de responsabilidad social corporativa.

Pascoal entiende que la responsabilidad social empresarial, o corporativa, tiene todavía mucho que recorrer en Brasil, en la medida en que es un concepto que debe ser practicado por toda la sociedad, por todos los sectores sociales, en el sentido de busca de la ciudadanía plena.

“El brasileño tiene buen corazón, es cooperativo, pero la mayor parte de las acciones en ese sentido tienen el perfil de la caridad, de la ayuda para atender una necesidad inmediata. Todavía no tenemos una cultura estructurada de responsabilidad social”, sostiene el empresario. □

Petrobras, seguida de cerca por ONG

Petrobras, la principal empresa de Brasil, con negocios de potencial impacto sobre el medio ambiente, está procurando implantar una política de responsabilidad social y ambiental a partir del Programa Desarrollo y Ciudadanía Petrobras. El programa tiene directrices como la actuación de la empresa en sintonía con las políticas públicas, el respeto a la diversidad y la prioridad a la juventud, además de la busca de sostenibilidad de sus acciones.

Petrobras enfrenta, empero, acciones críticas como las relacionadas con derramamientos, como el de 4 millones de litros de petróleo crudo en el río Iguazú, en Paraná, en el 2000, lo que llevó a la inversión de R\$3.8 millones (\$2.2 millones), en tres años, en el Programa de Excelencia en Gestión Ambiental y Seguridad Operacional, que repercutió en la disminución de 97% en los derrames entre el 2000 y el 2002.

La construcción del gasoducto Urucu-Manaus, en plena Amazonia, también generó inquietud entre organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, por ejemplo, en términos de eventuales impactos en el estilo de vida de las comunidades nativas; 10 pueblos indígenas viven en la región. El gasoducto, de 670 km de extensión, en fase final de construcción, llevará el gas natural desde la zona petrolera de Urucu, en el municipio de Coari, hasta Manaus, la capital del estado de Amazonas.

También la actuación de Petrobras en América Latina es seguida de cerca por ONGs brasileñas. El Proyecto Brasil Sustentable/FASE lanzó, por ejemplo, el libro *Petrobras: ¿integración o explotación?*, con artículos sobre situaciones críticas que tienen participación de Petrobras, como en el caso de un proyecto en Ecuador, en el Parque Nacional Yasuni, donde viven los indígenas huaorani (NA, Jul. 27, 2005 y Mayo 16, 2007). —JPM.

No a castigos físicos ni tratos humillantes

Uruguay y Venezuela pioneros en leyes que prohíben violencia contra niños y adolescentes.

Uruguay se convirtió en el primer país latinoamericano en abolir por ley los castigos corporales y todas las formas de tratamiento humillante que padres o tutores suelen dispensar a niños y adolescentes, una recomendación que había sido formulada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) —en su Informe Mundial sobre Violencia contra la Infancia 2006— y que el presidente Tabaré Vázquez puso a consideración del Congreso.

“Sabemos que la peor violencia es invisible y no puede ser regulada por ley, pero creo que hemos avanzado mucho: esta norma tiende a cambiar nuestras cabezas, la suya, la mía, la de todos, la cabeza del mundo adulto, que es la que tiene que cambiar para modificar esta matriz cultural que asocia la educación con los castigos físicos”, dijo en medio del debate parlamentario la diputada Nora Castro, del gobernante Frente Amplio.

La ley 18.214, aprobada en noviembre del 2007, consta de sólo tres breves artículos que derogan otros tantos del Código Civil e incorporan al Código de Niñez y Adolescencia un numeral que prohíbe a “padres o responsables, así como a toda persona encargada del cuidado o educación de niños, niñas y adolescentes, el uso del castigo físico o cualquier tipo de trato humillante como forma de corrección o disciplinamiento”.

El proyecto había sido sancionado por unanimidad por los senadores en agosto del año pasado, pero cuando se abrió el debate entre los diputados, los legisladores del derechista Partido Blanco (Nacional) cambiaron de posición y unificaron el discurso para desacreditar la norma. El Congreso “actúa como sirviente de un ente foráneo —en alusión a la ONU— que nos ha confundido con una republiquetá bananera”, llegó a decir el diputado blanco Sergio Botana.

Apelando reiteradamente al ejemplo de la madre que le da una palmada a un chico que está por meter sus dedos en un enchufe eléctrico, los diputados blancos reivindicaron el derecho de los padres a “castigar moderadamente” a los hijos o “darle un tirón de orejas al niño que se porta mal, ¿o acaso ninguno de nosotros lo ha hecho?”, dijo el diputado Luis Lacalle Pou, hijo del ex presidente Luis Alberto Lacalle (1990-95).

“A partir de ahora, ¿seré un delincuente, porque castigo y seguiré castigando a mis hijos? Esta ley limita el poder de los padres y perfora la institución familiar, hoy todos hablan

de los derechos de los niños, ¿y sus obligaciones, dónde están?, ¿cuándo va a presentar el gobierno un proyecto de defensa de la familia?”, exclamó en un momento del debate el diputado Botana, dejando atónitos a sus propios compañeros de bancada.

Todos castigan

Una investigación del Programa Arco Iris, una entidad uruguaya que atiende a niños y adolescentes víctimas de violencia familiar, maltrato y abuso sexual, destaca que “las expresiones de violencia hacia los chicos atraviesan transversalmente a todas las capas sociales, para incluir por igual a los sectores más cultos o más acaudalados, a los de más bajos niveles de instrucción o a los más postergados en el reparto del ingreso”.

Un estudio realizado por la organización Save The Children-Suecia ya había mostrado en el 2005 que “las formas de maltrato a los menores están institucionalizadas en América Latina”, y una consulta realizada ese mismo año por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) concluyó que “América Latina es una de las áreas más violentas del mundo y los menores de edad son las víctimas principales” (NA, Jun. 15, 2005).

El 10 de diciembre Venezuela se convirtió en el segundo país de la región en abolir toda forma de violencia en la educación de los menores, al incorporar a su Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente una cláusula que norma el derecho al buen trato y la prohibición expresa del castigo físico y/o humillante.

La nueva normativa venezolana entiende por castigo físico el “uso de la fuerza con la intención de causar algún grado de dolor o incomodidad corporal” para así modificar el comportamiento de los niños, y por castigo humillante define “cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante o ridiculizador realizado en ejercicio de las potestades de crianza o educación” de los menores.

Otras iniciativas legislativas

Días después fue el Congreso de Chile el que empezó a recorrer un camino similar, cuando el 20 de diciembre la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado dio curso parlamentario a un proyecto que modifica un artículo del Código Civil que permite a los padres “corregir” a sus hijos, estableciendo claramente que dicha facultad excluye todo tipo de castigo físico.

De acuerdo con una investigación de Save The Children-Suecia, con Uruguay y Venezuela, son 18 los países del mundo que protegen a los niños y adolescentes de los abusos de sus mayores, mientras en América Latina y el Caribe en la actualidad sólo Brasil, Colombia, Costa Rica y Perú están desarrollando iniciativas legislativas contra el castigo físico.

UNICEF celebró el paso dado por Uruguay, aunque advirtió que, “si bien es bienvenida, por sí sola la ley no producirá cambios en materia de violencia contra la infancia. Los castigos físicos hablan de falta de autoridad, pero dudo que el Estado pueda decirles a los padres cómo criar a sus hijos”, dijo Gimol Pintos, oficial de protección de UNICEF para el Río de la Plata. □

CHILE/PERÚ

No a la guerra. En un comunicado dado a conocer el 8 de febrero, el Movimiento Humanista se pronunció sobre el diferendo marítimo entre Chile y Perú que ha sido llevado por este último país a la Corte Internacional de La Haya.

Ambas naciones disputan un área marítima de 35,000 km² en el Océano Pacífico. Perú sostiene que la frontera marítima con Chile no está delimitada y que debe ser trazada de manera equidistante a sus costas, mientras que Chile afirma que la frontera marítima ya fue definida en tratados firmados en los años 50 —que para el Perú no eran tales, sino acuerdos pesqueros— y que la línea debe ir en paralelo a su frontera.

Tomás Hirsh, ex candidato presidencial chileno y vocero del Humanismo para Latinoamérica, y Javier Zorrilla, representante del Humanismo en el Perú, coincidieron en señalar que la instancia jurídica internacional es el canal adecuado para resolver el diferendo marítimo y que el veredicto debe ser aceptado por ambas naciones.

Ante la presunción de que Chile pudiera verse tentado a desconocer el fallo de la instancia jurídica internacional, en caso le sea adverso, ambos voceros invocaron a desarrollar políticas de paz, justicia e integración, y desarrollar un desarme proporcional que permitirá invertir en la lucha contra la pobreza. —NA.

Catástrofe en ciernes

Informe advierte que cambio climático aumentará vulnerabilidad de región a desastres.

El Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) 2007-2008, publicado a fines del año pasado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), analiza el impacto del cambio climático y advierte que sus efectos serán catastróficos si los gobiernos del mundo no actúan con celeridad para reducir drásticamente sus emisiones de carbono.

Los efectos del cambio climático, entre ellos, huracanes devastadores que ocurrirán cada vez con mayor frecuencia, serán particularmente desastrosos para regiones como América Central, donde tales fenómenos se ven agravados por la desigualdad.

El informe advierte claramente que urge replantear un modelo económico que impulsa el consumo desenfrenado y que es insostenible en términos ecológicos. Sin embargo, la Cumbre Sobre Cambio Climático realizada en Bali, Indonesia, del 3 al 14 de diciembre del 2007, reveló que muchos países desarrollados carecen de la voluntad política para resistir la presión de los poderosos lobbys energéticos y automovilísticos y dar pasos decisivos para frenar el calentamiento global.

Los efectos del cambio climático se sufrirán en todo el planeta pero afectarán con particular intensidad a los países en desarrollo, ya que éstos carecen de los recursos adecuados para mitigar el impacto de los desastres naturales. Como señala el informe, el cambio climático es "una tragedia humana en ciernes".

América Central, de por sí vulnerable a desastres climáticos como los huracanes, podría experimentar una intensificación de estos fenómenos ya que reúnen su fuerza del calor de los océanos y éstos se están calentando a consecuencia del cambio climático.

Amenaza para el desarrollo

Una de las conclusiones principales del IDH es que el cambio climático exacerbará la desigualdad y la pobreza en una región del mundo que ya tiene uno de los índices más grandes de inequidad. A nivel global, también aumentará la brecha entre países desarrollados y países en desarrollo.

Según el informe, las disparidades en el desarrollo humano en el interior de un país constituyen un factor de vulnerabilidad ante los desastres que traerá el cambio climático. Como ejemplo se cita el paso del huracán Stan en Guatemala a principios de octubre del 2005 y la manera en que la desigualdad, sobre todo entre la población indígena y no indígena, "actuó como una barrera para la pronta recuperación".

El huracán Mitch, que azotó Honduras en 1998, es otro ejemplo. Tras el huracán, los hogares rurales pobres perdieron entre 30% y 40% de los ingresos provenientes de sus cosechas. La pobreza aumentó 8% a nivel nacional, de 69% a 77%. Además, estos hogares perdieron entre 15% y 20% de sus activos productivos.

Honduras es uno de los países más desiguales del mundo, con un Coeficiente de Gini de distribución del ingreso (0=igualdad perfecta y 100=desigualdad perfecta) de 54, lo cual quiere decir que el 20% más pobre de la población se queda apenas con el 3% del ingreso nacional. Esto significa que la pérdida de activos entre los pobres se traducirá en menos oportunidades de inversión, más vulnerabilidad y mayor desigualdad de ingresos en el futuro.

Mecanismos de autoseguro

Otro informe, "Cambio Climático en América Latina y el Caribe 2006", publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), señala que la región no se encuentra preparada para afrontar el problema del calentamiento global. Advierte que se ha avanzado en cuanto a las medidas para mitigar el impacto de los desastres pero no en la adaptación a las nuevas condiciones climáticas.

Sin embargo, el IDH también señala que los países pobres no son víctimas pasivas ante los desastres y que ante la falta de acceso a seguros formales, muchas poblaciones desarrollan sus propios mecanismos de autoseguro. Uno de ellos es acumular activos, como ganado, durante épocas normales para venderlos en tiempos de crisis. Otros son la inversión de recursos familiares en la prevención de desastres o la diversificación de la producción y de las fuentes de ingreso.

El informe cita el caso de El Salvador, donde encuestas realizadas en asentamientos urbanos bajo riesgo de inundación, revelan que las familias invierten hasta el 9% de sus ingresos en proteger sus hogares contra inundaciones y utilizan la mano de obra familiar para construir muros de retención y mantener canales de drenaje.

Los pueblos indígenas, que se verán particularmente afectados por los efectos del cambio climático, pero han sido excluidos de la mayoría de los debates sobre el tema, han practicado durante cientos de años muchos de estos mecanismos de autoseguro para adaptarse a las variaciones en los patrones climáticos (NA, Nov. 14, 2007).

El informe concluye que los países desarrollados, donde vive el 15 % de la población mundial pero donde se generan casi la mitad de las emisiones de CO₂, debe asumir sus responsabilidades frente a los países en desarrollo, reduciendo sus emisiones en por lo menos 80% con reducciones de 30% de aquí al 2020, e invirtiendo mayores fondos para prevenir y mitigar los desastres naturales en los países en desarrollo.

Aunque es justo que aquellos países que contaminan más se hagan responsables por los efectos del calentamiento global, podría argumentarse que los gobiernos del istmo también deberían replantear el impacto ambiental de sus políticas energéticas.

En vez de protegerse contra el cambio climático, muchas de las políticas de los gobiernos del istmo tienden a exacerbar el problema.

El investigador Gian Carlo Delgado Ramos, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, México, argumenta que los proyectos hidroeléctricos que han sido impulsados en toda Mesoamérica como parte del Plan Puebla Panamá (PPP), han sido erróneamente etiquetados como amigables para el ambiente (NA, Nov. 29, 2006 y Oct. 31, 2007)

Según el investigador, los embalses contribuyen al calentamiento global ya que la vegetación y demás materia orgánica inundada se descompone generando grandes cantidades de dióxido de carbono y metano. □

Tras el huracán Mitch, la pobreza aumentó 8% a nivel nacional en Honduras.

Guerra mediática

Gobierno y medios privados se acusan mutuamente de mentir a población.



Prensa boliviana vive una "esquizofrenia ideológica".

MARTINGARAT

"¡Bolivia cambia, Evo cumple!", exclama un breve mensaje televisivo a favor del gobierno. Luego sigue otro *spot* donde "Doña María", de 78 años, exige al presidente Evo Morales "dejar de lado el odio" y dialogar con la oposición. El mensaje está firmado por los prefectos opositores al gobierno y forma parte de la guerra mediática en Bolivia.

Un recorrido por los noticieros televisivos muestra un país dividido. El canal público está en manos del oficialismo y hace propaganda en favor del presidente. La mayoría de los canales privados, en cambio, critican con dureza las acciones del mandatario.

Pero los noticieros opositores son interrumpidos a menudo por los *spots* publicitarios del gobierno. Los medios privados tienen una difusión mucho mayor, por lo que el gobierno les compra espacio publicitario. El resultado es una esquizofrenia ideológica entre el contenido informativo y los mensajes de propaganda.

Para el periodista y analista de medios Rafael Archondo, los medios privados actuaron con cautela durante los primeros meses del gobierno de Morales.

"El conflicto empezó recién en julio del 2006, cuando se realizó la elección de representantes a la Asamblea Constituyente", dice. "Los medios privados comprendieron que el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales podía llegar a convertirse en un partido hegemónico. Las críticas más duras comenzaron cuando el MAS planteó que la nueva Constitución fuera aprobada por mayoría simple, que les habría permitido redactarla sin hacer alianzas. La ley exigía una mayoría de dos tercios [NA, Nov. 15, 2006]".

Morales contraatacó y acusó a medios y periodistas de "mentirosos" y de no informar sobre los avances sociales de su gobierno. Varios medios privados acudieron entonces a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para denunciar las acusaciones.

"Al final, los movimientos sociales afines al gobierno empezaron a atacar directamente a los canales televisivos considerados más contrarios al gobierno", cuenta Archondo.

En Santa Cruz, la sede del canal público fue atacada por jóvenes alineados con la oposición.

Autocensura

Aunque varios representantes de los medios acusan al gobierno de intentar silenciarlos, Archondo considera que una censura estatal no es posible.

"Hay muchos medios en Bolivia, por lo que sería imposible controlarlos. La situación actual demuestra todo lo contrario: que los medios pueden criticar al gobierno, y de hecho lo hacen sin cesar", sostiene.

Para Archondo, el problema no es una eventual censura estatal sino la ya instaurada autocensura.

"Los periódicos *El Deber* de Santa Cruz —la ciudad que más rechaza al presidente Morales— y *El Alto* de El Alto —la que más lo apoya— son propiedad del mismo grupo editorial, pero no publican las mismas noticias ni sostienen las mismas opiniones. Los medios se ven obligados a adaptarse a las reivindicaciones de sus regiones, y eso implica autocensura", explica.

En los últimos meses, los conflictos políticos y regionales se han agudizado. Los temas en discordia son la aprobación el 24 de noviembre de la nueva Constitución sin la presencia de la oposición (NA, Dic. 12, 2007) y la propuesta gubernamental de recortar drásticamente el aporte estatal al presupuesto de las regiones, controladas en su mayoría por la oposición.

Públicos contra privados

A medida que ha aumentado la tensión, los bolivianos se han acostumbrado a digerir hasta 10 *spots* televisivos por hora.

El sociólogo José Mirtenbaum señala que los medios privados son controlados por un grupo de dueños relativamente pequeño.

"Los propietarios son pocos y se conocen entre sí. Tienen intereses en el mercado financiero y la banca, y algunos son terratenientes", dice Mirtenbaum. "Los medios privados se oponen a todo lo que huele a lucha social y a 'comunismo', entre comillas. Tienen como blanco preferido al presidente indígena y al gobierno en general. Pero también los errores del gobierno contribuyen a multiplicar las críticas".

Los medios públicos, en cambio, siempre han sido manejados por el gobierno de turno y esto no ha cambiado con Morales. Pero, con casi todos los medios privados en su contra, "el gobierno se ve obligado a defenderse con aún más fuerza en la televisión y la radio públicas. Por ello, la parcialidad de esos medios es obvia", dice Archondo.

Entonces, ¿cómo se informan los bolivianos, acorralados por medios con claras posiciones políticas?

Los medios de mayor impacto en la opinión pública son la televisión y la radio. Son gratuitos y llegan a todo el territorio nacional. Los periódicos tienen pocos lectores debido a su costo relativamente alto (US\$0.50) y al bajo nivel de escolaridad de la población. El diario de mayor tiraje, *El Deber* de Santa Cruz, sólo vende unos 25,000 ejemplares en un país de 9 millones de habitantes.

"En Bolivia hay unos 4 millones de adultos que se valen de la radio, la televisión y los periódicos para informarse. La mayoría sabe muy bien que son tendenciosos y suele escoger a aquellos que están más cerca de su propio pensamiento político", dice Mirtenbaum.

Una buena noticia, opina Mirtenbaum, es que el acceso a internet es cada vez mayor. Ya hace varios años que las ciudades están llenas de cafés de internet, y ahora la red también llega a las poblaciones rurales.

"Los jóvenes usan la red para divertirse con videojuegos y esas cosas. Pero también buscan información, y se dan cuenta de que hay algo más allá de Bolivia. Poco a poco, internet les abre el mundo", afirma. □

Asume nuevo gobierno

Primer ministro deberá resolver disputa fronteriza con Guatemala.

El 12 de febrero juramentó el nuevo gobierno encabezado por el primer ministro Dean Barrow.

Barrow, afrodescendiente de 56 años y líder del opositor Partido Democrático Unido (UDP por sus siglas en inglés), ganó 25 de los 31 escaños parlamentarios en las elecciones del 7 de febrero. Derrotó al primer ministro Said Musa, del Partido Unido del Pueblo (PUP), en el gobierno desde 1998.

"Esta es claramente una victoria de la gente", dijo Barrow en una radio local. "Nos están dando un enorme voto de confianza".

La campaña de Barrow se enfocó en la realización de un gobierno honesto y de principios. Entre sus promesas incluyó medidas para incrementar la investigación independiente e imparcial de las acusaciones de corrupción que pesan sobre la anterior administración.

Barrow, quien gobernará hasta el 2013, también prometió transparencia en los negocios que realice el gobierno, para lo cual propuso revisar el Acta de Libertad de Información y prohibir las cláusulas secretas en los contratos oficiales.

La nueva administración cuenta con 16 ministros que, según Barrow, fueron elegidos teniendo en cuenta la distribución geo-



Dean Barrow

"Nos están dando un enorme voto de confianza".

— Dean Barrow

gráfica y el equilibrio étnico.

En Belice conviven diferentes culturas, lenguas y grupos étnicos: mestizos, garífunas, indígenas mayas, chinos, indoa- siáticos y árabes, entre otros,

Aunque el idioma oficial es el inglés, la mayoría de belice- ños habla castellano. Un 46% de los 297,000 habitantes es hispanohablante, mientras que sólo 4% es anglófono; un importante 33% habla creole.

Principales retos

Los desafíos más grandes que deberá enfrentar Barrow son el déficit en el comercio exterior, la deuda externa y la pobreza que afecta a un tercio de la población. Aunque el UDP se ha comprometido a incrementar la tasa de crecimiento a por lo menos 6% anual, el Fondo Monetario Internacional estima que el crecimiento será de 3% para este año, similar al del 2007.

Otro asunto prioritario para Barrow será la disputa fronteriza con Guatemala. Mientras el ahora opositor PUP está a favor de un referendo sobre si se lleva el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya o a un arbitraje, el UDP plantea recurrir directamente a la CIJ. En cualquier caso, será inevitable para Belice hacer concesiones conciliatorias con Guatemala.

Belice se independizó de Gran Bretaña en 1981, pero Gua- temala recién la reconoció en 1993. Gua- temala reclama más de 11,000 km², la mitad del territorio beliceño. En el 2005 ambos paí- ses firmaron el Acuerdo Marco de Negociación y Medidas de Fomento de la Confianza que pondría fin al reclamo guatemalteco.

En las elecciones del 7 de febrero los beliceños también votaron en un referendo a favor de que los ocho integrantes del Senado sean elegidos por voto popular y no nombrados por el gobierno tal como lo establece la actual Constitución.

El sistema político beliceño es una democracia parlamentaria basada en el modelo británico. Forma parte de la Mancomunidad Británica de Naciones (Commonwealth), y reconoce a la reina Isabel II de Inglaterra como jefa de Estado, representada por el gobernador Colville Young. □

Noticias Aliadas, edición impresa, ofrece información y análisis sobre el acontecer de América Latina y el Caribe con énfasis en los temas que afectan a las poblaciones excluidas de la región. Versión en inglés: **Latinamerica Press**.

Producido por **COMUNICACIONES ALIADAS**, organización no gubernamental con sede en Lima, Perú, que por más de 40 años produce información y análisis independiente y confiable. Nuestro objetivo es visibilizar los problemas y situaciones que transgreden los derechos humanos de las poblaciones excluidas y menos favorecidas de América Latina y el Caribe.

Directora ejecutiva: Raquel Gargatte Loarte

Directora de prensa: Elsa Chanduvi Jaña

(echanduvi@comunicacionesaliadas.org)

Editoras: Cecilia Remón Arnáiz, Leslie Josephs

Editor gráfico: William Chico Colugna

Impresión: Ediciones Atenea E.I.R.L., Jr. Carlos Gonzales 252,

Lima 32, Perú (511) 242 8263

Comunicaciones Aliadas

Jirón Olavegoya 1868, Lima 11, Perú

(511)265 9014 Fax: (511)265 9186

info@comunicacionesaliadas.org

www.noticiasaliadas.org

www.latinamericapress.org (en inglés)

Además de nuestra edición impresa, ofrecemos recursos electrónicos y en línea, así como informes especiales y servicios informativos gratuitos por e-mail.

Para información de servicios y productos, contactarse con

Patricia Díaz, Responsable de Mercadeo, a

pdiaz@comunicacionesaliadas.org



APARTADO 18-0964, LIMA 18, PERÚ

Noticias Aliadas es una asociación sin fines de lucro, con Registro Civil N° 646, Asiento A-1 (Art. 33°, D.L. 20680). Hecho el depósito legal N° 99-4052.

Printed Matter
IMPRESOS